

Punta Arenas, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece **PAULO DI CÉSAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, Defensor Penal Público Licitado, quien interpone acción constitucional de amparo en favor de don **VLADIMIRO MOISÉS GALLARDO POLL**, y en contra de la Sra. Jueza de Letras y Garantía de Porvenir, en carácter de subrogante, doña Paula Stange Kahler, quien mediante resolución dictada en audiencia de control de detención de fecha 22 de octubre 2024, decreta la prisión preventiva sobre el mismo, en autos RIT N° 275-2024, RUC 2401277854-2, resolución mediante la cual, ilegal y arbitrariamente avala la detención improcedente del amparado y seguidamente decreta la privación de libertad del mismo, sin que, a su juicio, exista justificación ni delito que sustente la decisión. Dicha resolución atenta contra la libertad personal y seguridad individual del amparado.

Expone que con fecha 22 de octubre 2024, en causa RIT 275-2024 se lleva a cabo audiencia de control de detención respecto de don Vladimiro Gallardo Poll, donde es formalizado por los delitos de abigeato del art. 448 quater del Código Penal, y conducción sin la debida licencia de conductor del art. 194 de la Ley 18.290, por los hechos acaecidos el día 21 de octubre 2024, en horas de la tarde. Misma audiencia donde seguidamente se decreta la medida cautelar de prisión preventiva.

Agrega que el procedimiento que da lugar a la detención tiene su origen en una llamada a la central de Carabineros de Porvenir, de parte de un vecino de la comuna, quien a las 18.10 hrs. denuncia haber visto circulando por la vía pública, el mismo día, pero a las 09.30 hrs., un tractor de color verde con un acople con animales. Posteriormente, en el parte policial, carabineros agregan que este tractor verde, además, no tenía patente. Así entonces, para comenzar circunscribiendo los hechos, la denuncia es: un tractor verde circulando por la vía pública, sin patente, con un carro de arrastre con animales.

Indica que, producto de ello, carabineros concurre al lugar, Ruta Y-71, Km.10 de Porvenir, para fiscalizar el tractor sin patente, y así, a las 18.40 hrs. sorprenden el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EVHFXQYSTNV

tractor, sin patente, con un acople con 3 animales vacunos y 1 caballo con montura. Tractor conducido por don Vladimiro Gallardo Poll. El vehículo no contaba con documentación, y el conductor lo hacía portando licencia profesional de conducir clase A-2. Revisados los animales, señala carabineros, no tenían marca ni señal que acredite su propiedad, así como tampoco mantenía "formulario movimiento animal" exigido para transportar animales. Frente a ello, el Sr. Gallardo habría señalado que los animales eran de su propiedad y que los trasladaba del campo de su hermana hacia el campo de su madre (familia conocidamente dedicada a la ganadería en la comuna). Además de señalar que los animales eran "ariscos o baguales", que por ello aún no habían logrado marcarlos, y que precisamente con esa intención estaban siendo trasladados. Razones en definitiva, por las que es llevado hacia dependencias de la comisaría de Porvenir, instruyendo la fiscal de turno su detención por el delito de Abigeato.

Agrega, que puesto el detenido a disposición del tribunal, la Sra. Jueza recurrida, previa audiencia, solicita los antecedentes de la detención y del imputado constatando que se encuentra cumpliendo condena a la fecha, gozando del beneficio de salida laboral diaria. Una vez comenzado el control de detención, la Magistrada constata, en consulta al propio detenido, la calidad de condenado en causa diversa, y sin que el Ministerio Público expusiera los hechos de la detención, se ofrece la palabra a esta defensa, incidentado la legalidad de la misma toda vez que los hechos expuestos en los antecedentes policiales no dan cuenta de estar frente a un delito de abigeato, ni aparentemente ninguna conducta punible, faltando requisitos de la esencia para la concurrencia de este delito y cualquier otro, según se expondrá en lo sucesivo. Solicitud de ilegalidad rechazada por la jueza recurrida.

Indica que seguidamente se procede a formalizar por los siguientes hechos: "el día 21 de octubre 2024 a las 18.40 hrs, en circunstancias que el imputado, Vladimiro Moisés Gallardo Poll, conducía por ruta Y71, a la altura del Km 10, un tractor de color verde, sin patente, con un acople en el que se trasportaban tres animales vacunos sin marcas ni



señales que acrediten su propiedad, y un caballo con montura y marca borrosa. Fiscalizado por carabineros le requieren documentación del vehículo, animales y su transporte, específicamente uno que acredite el dominio, posesión o legítima tenencia y su respectivo formulario de tenencia animal, señalando el imputado que no tenía documentos y que aquellos animales eran ariscos, de su propiedad, y que los trasladaba del predio de su hermana al predio de su madre, sin justificar adquisición o legítima tenencia, ni contar con documentación para justificar el transporte de los mismos. Cabe destacar que el imputado no cuenta con licencia profesional para conducir el vehículo tipo tractor, que requiere licencia profesional clase D". Se califica estos hechos como delito de abigeato del art. 448 quater del Código Penal, y conducción sin licencia debida del art. 194 de la Ley de Tránsito.

Expone que, comunicados los hechos de la formalización, se procede a discutir medidas cautelares, solicitando el Ministerio Público la imposición de la prisión preventiva, basada en los antecedentes del parte policial (básicamente declaraciones de carabineros y el denunciante), pero agregando esta vez, para justificar la necesidad de cautela, la circunstancias de mantener anotaciones pretéritas, reincidencia específica, que actualmente estaba en cumplimiento de condena, y hace 1 mes con beneficio de salida laboral diaria.

Señala el recurrente que se opuso a esta solicitud, manteniendo la alegación de que, al no existir denuncia previa de sustracción de estos animales, sin dueño que los pretenda, no se cumple con el requisito base del tipo penal, que la especie encontrada sea ajena, no siendo posible construir el delito de abigeato basado en la mera sospecha (al mantener antecedentes anteriores) de que el animal sin dueño, sin marca, sin documentación, fue necesariamente sustraído del dominio ajeno. Trazando el lineamiento de que transportar animales sin dueño no es delito, que transportar animales sin marca no es delito, y transportar animales sin el formulario respectivo tampoco es delito, pues precisamente falta el elemento central, que es que exista un dueño.



Por otra parte, esta referencia a la "marca borrosa" del caballo, es una apreciación hecha solo en audiencia, sin sustento fáctico ni antecedentes que lo señalen antes (sin que exista en las declaraciones ni fotografías), más que solo los dichos de la fiscal en la misma formalización. Por lo demás, una marca borrosa, aun cuando así fuere, sin denuncia alguna respecto a la misma, tampoco constituye delito.

Agrega, que frente al supuesto delito de conducción sin la licencia debida, art. 194 Ley de Tránsito, que sabemos no es el delito decisivo para la prisión preventiva, manifiesta que el imputado sí mantenía licencia de conducir, además ella era del tipo profesional A-2, solo que no contaría con la licencia especial para conducir un vehículo tipo tractor. Situación que, como se verá, tampoco es constitutiva de delito.

Pese a las evidentes señales de estar frente a hechos no constitutivos de delito, la Magistrada, al decidir sobre la prisión preventiva, refiere que, a su criterio, el Ministerio Público habría dado suficiente razón para considerar como concurrentes los requisitos de las letras a y b del art. 140 del Código Procesal Penal, existiendo antecedentes que justificarían los delitos que se investigan, como la denuncia realizada y el hallazgo de las especies - aun cuando la denuncia sea por otra cosa y las especies no sean ajenas - para entender que existiría participación como autor en los delitos imputados. En cuanto a la necesidad de cautela, tiene en especial consideración el permiso de salida al medio libre del que gozaba Gallardo Poll al momento de estos hechos, y que en ese contexto es sorprendido en flagrancia, además de mantener condena de la misma especie, constituyendo un peligro para la sociedad y peligro de fuga. En consecuencia, decreta la prisión preventiva, no sin antes hacer la salvedad de que la misma regirá mientras no sea revocado el beneficio penitenciario que mantenía hasta el día de los hechos.

La ilegalidad en la privación de libertad del amparado se materializa en la resolución recurrida, cuando la Juez subrogante de Garantía de Porvenir, mediante una decisión judicial ilegal y arbitraria, rechaza la incidencia de ilegalidad de detención y posteriormente decreta la prisión



preventiva contra el amparado, teniendo conocimiento que los hechos relatados no eran constitutivos de delitos, basada en un verdadero derecho penal de autor, al informarse previamente de los antecedentes penales del imputado, ordenando ilegalmente la privación de libertad del mismo.

Manifiesta que el delito de abigeato se encuentra sancionado dentro de los delitos contra la propiedad. Así entonces, el párrafo comienza, en el art. 448 bis, señalando qué se entiende por abigeato, refiriendo como verbo rector el robar o hurtar animales, continuando con ciertas presunciones de abigeato, como alterar o eliminar marcas de estos, contramarcas, portar certificados falsos, etc., pero todo ello con una particularidad: que se trate de animales ajenos. Lo que es evidente, atendido el emplazamiento de la norma en el Código Penal, en el título de delitos contra la propiedad, lo que presupone que, para que haya propiedad, exista dominio ajeno, si no lo hay no habrá robo, no habrá hurto, no habrá abigeato. Por su parte, el art. 448 quater (por el cual se formalizó), y que es una suerte de receptación en el delito de abigeato, comienza señalando: "Se castigará como autor de abigeato a aquel en cuyo poder se encuentren animales o partes de los mismos referidos en este párrafo," La voz "referidos en este párrafo" circunscribe el alcance de la norma, pues los animales referidos en este párrafo son precisamente los animales ajenos. Si no tenemos denuncia sobre algún tipo de sustracción, si no tenemos dueño reclamando dominio sobre los animales "sin marca", no tenemos animales ajenos y con ello no tenemos derechamente abigeato, ni en su descripción típica del 448 bis, ni en la subsidiaria del 448 quater.

Frente al otro delito imputado, conducción sin licencia debida, haciendo un análisis del texto expreso, y bajo el alero del principio de legalidad, señala que tampoco es constitutivo de delito; que el delito formalizado, corresponde al señalado en el artículo 194 de la ley 18.290; que necesariamente se debe hacer la correlación con el artículo 12 de la misma norma, que señala los tipos de licencia existentes. Salta a la vista la precisión de las normas citadas, que en la descripción del tipo se exige



entonces que la conducción se realice sin la licencia profesional debida. Dicho esto, y remitiéndonos al artículo 12, que detalladamente señala las clases de licencia, mandata que las licencias profesionales son las de clase A. Justamente de las que el imputado sí posee.

Expone, que para la conducción del vehículo tractor, no se requiere licencia profesional, sino que especial, de clase D, en los términos de la norma citada, la que, efectivamente, el amparado no poseía, pero que no da lugar a la concurrencia del delito, que exige textualmente licencia profesional, no especial.

Termina solicitando se acoja el presente recurso por considerar ilegal y arbitraria la resolución de la Magistrada recurrida, declarando la ilegalidad de la detención y dejando sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre el amparado.

Informó el recurso doña **PAULA STANGE KAHLER**, Juez Subrogante en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Porvenir, quien expone que la acción de amparo constitucional procede en aquellos casos en que una persona fuere arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes o sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza a los derechos fundamentales antes aludidos, fuera de los casos en que el ordenamiento jurídico lo permite, con el fin de que se ordene guardar las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, cuyo no es el caso de autos.

Manifiesta que actuó dentro de sus facultades, y en el marco que prevé el legislador, el que expresamente entrega al Juez de grado la resolución de la legalidad o ilegalidad de una detención, siendo inapelable para la amparada la resolución de legalidad de la detención que se emitió, fundadamente, y previo debate, según consta del registro de audio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 bis del Código Procesal Penal, fundado en un indicio concreto, expuesto por el ente persecutor, del que dejaron constancia funcionarios policiales, y que dio con el hallazgo inevitable de lo que en definitiva fue el objeto de un nuevo delito



imputado al condenado, quien se encontraba con permiso de salida por parte de Gendarmería de Chile.

Agrega que, tras declarar la legalidad de la detención, se abrió debate sobre las medidas cautelares, y se resolvió fundadamente la prisión preventiva del imputado, la que se ordenó cesar en el evento de que Gendarmería le revocara el beneficio de salida que mantenía, al estar condenado a pena efectiva en otros autos, todo lo que consta en la causa.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de amparo es una acción constitucional que da origen a un procedimiento autónomo que tiene por objeto proteger la libertad personal y seguridad individual, cuando ella se encuentra amenazada, coartada o vulnerada en cualquier forma, en virtud de una orden ilegítima o de un acto arbitrario.

En consecuencia, puede interponerse de inmediato para instar por la libertad física o ambulatoria de una persona contra quien exista una orden de arraigo, detención o prisión emanada de autoridad que no tenga facultad para disponerla o que, teniendo esa facultad, la ha expedido fuera de los casos previstos en la ley o sin que haya mérito o antecedente que la justifiquen, sea que dicha orden se haya ejecutado o no, por lo que el amparado o cualquier persona a su nombre podrán, si no se hubieren deducido los otros recursos legales, reclamar su inmediata libertad o que se subsanen los respectivos defectos.

Por último y acorde a lo expuesto, la procedencia de esta acción en contra de una resolución judicial es excepcional.

Conforme a lo anterior, los fundamentos de la acción constitucional deben ser analizados uno a uno para efectos de determinar si concurren en la especie y autorizan la protección constitucional que este arbitrio otorga.

SEGUNDO: Que, conforme a lo expuesto, corresponde dilucidar si la decisión del Tribunal de Garantía de Porvenir al decretar la legalidad de la detención del amparado y su



posterior prisión preventiva constituye un acto ilegal o arbitrario que justifique acoger la acción interpuesta.

TERCERO: Que del mérito de los antecedentes expuestos, se debe concluir que la Sra. Jueza recurrida, al decidir del modo que lo hizo, no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

Al efecto, la vulneración que se reclama a favor del amparado ha sido impuesta por una resolución judicial debidamente fundada, dictada por la autoridad judicial competente, dentro de un procedimiento legalmente tramitado.

Del mismo modo corresponde descartar la arbitrariedad en la resolución objeto de la acción constitucional, ya que aquella, además de haber sido precedida de debate por parte de los mismos intervinientes de autos, se encuentra debidamente motivada, cuenta con fundamentos de hecho y de derecho, los que le otorgan razonabilidad y la decisión deriva de la totalidad de los argumentos que en ella se contienen. Distinto resulta que el recurrente no comparta los argumentos vertidos en la decisión, por ser disimiles de su pretensión.

CUARTO: Que, para esta Corte, la defensa ha recurrido al presenta arbitrio de amparo , que es un recurso extraordinario y de naturaleza Constitucional, esto último como se ha aludido en el primero de estos considerandos, en circunstancias que sus alegaciones para fundamentar el mismo, solo inciden en materias por la cuales el legislador contempla recursos ordinarios, y llama la atención que éstos no hayan sido ejercitados, pues mediante dicha vía se debió reclamar, si se estimaba que no se cumplían los requisitos, para disponer la prisión preventiva. Entenderlo en sentido contrario, equivale a desnaturalizar el recurso de amparo, transformándolo en un verdadero recurso de apelación.

QUINTO: Que, así las cosas, no advirtiéndose la existencia de un acto ilegal o arbitrario y considerando que el recurso de amparo tiene una naturaleza excepcional y que no es la vía idónea para que en la especie esta Corte conozca de las pretensiones de la Defensa del amparado, de manera que deberá rechazarse el presente arbitrio constitucional.



Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **SE RECHAZA** el recurso de amparo deducido por el abogado PAULO DI CÉSAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ en favor de don VLADIMIRO MOISÉS GALLARDO POLL, en contra de la Sra. Jueza (S) del Juzgado de Garantía Porvenir, Paula Stange Kahler.

Comuníquese, regístrese y archívense.

Se deja constancia que no firma, no obstante haber concurrido a la vista y el acuerdo, la Ministra titular Sra. Caroline Turner González, por encontrarse con cometido funcionario.

Rol Corte N° 137-2024. AMPARO.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EVHFXQYSTNV

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por Ministro Suplente Juan Santiago Villa M. y Abogada Integrante Gustava Soledad Aguilar M. Punta Arenas, treinta de octubre de dos mil veinticuatro.

En Punta Arenas, a treinta de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: EVHFXQYSTNV